



Jaque mate

SERGIO SARMIENTO

Por el vino

“El vino lava nuestras inquietudes, enjuga el alma hasta el fondo y, entre otras virtudes, asegura la curación de la tristeza”

SÉNECA

Ensenada, B.C.- Las fiestas de la vendimia y la producción vitivinícola han ayudado de manera muy importante a recuperar el prestigio nacional e internacional de Baja California afectado por la violencia criminal. Ayer se llevó a cabo el concurso de paellas, una competencia que, junto con una degustación de vinos de la región, se realiza en Viña de Liceaga en el Valle de Guadalupe. Con este concurso se cierran formalmente los festejos de la vendimia de Ensenada.

La producción del vino en México es un ejemplo notable de los beneficios de la apertura comercial para el país y sus habitantes. Cuando empezaron a abrirse las fronteras a los vinos extranjeros en la década de 1980 muchos productores, políticos y economistas populistas afirmaron que se acabaría la industria vitivinícola nacional, la cual producía vinos de mala calidad que se vendían a precios muy altos. Algo de razón tuvieron ya que la apertura hizo que un público mexicano poco conocido se preciara de comprar azucarados vinos alemanes por 25 pesos en los supermercados.

Con el tiempo, sin embargo, empezaron a surgir producciones de mejor calidad en lugares como el valle de Guadalupe y Parras, Coahuila. Construir una reputación no fue fácil debido al lastre de tantos años de pésimos vinos. De manera gradual algunos consumidores se fueron percatando de que los nuevos vinos mexicanos no sólo eran de mejor calidad que los anteriores sino que en ocasiones superaban a los de otros países del mundo. En las competencias internacionales, donde los vinos se catan a ciegas, los vinos mexicanos empezaron a obtener buenos resultados y a cosechar medallas cada año. Los vinos mexicanos, de hecho, son ya exportados con éxito a países como Francia, Italia y los Estados Unidos que son productores importantes y de calidad.

Los políticos mexicanos, desafortunadamente, aborrecen cualquier triunfo nacional o buscan sacar tajada sin importar el precio para la sociedad. En otros países del mundo la producción de vinos recibe apoyos fiscales importantes. En México se cobra un impuesto especial de 25% que, tras sumarle el 16% de IVA, ofrece una carga fiscal total de 45%. Por eso un vino mexicano es más caro en México que en los Estados Unidos.

En Francia, Italia y Portugal, según cifras de 2010 del Wine Institute, se consumen más de 40 litros de vino por persona al año. En España el volumen es de 26 litros, en Argentina de 23, en los Estados Unidos de casi 10. Incluso en Costa Rica se consumen 1.26 litros al año. En México no llegamos siquiera al medio litro por persona: Estamos, de hecho, en 49 centilitros.

El vino ha acompañado a la humanidad desde los inicios de la civilización. Fue una de las primeras bebidas elaboradas por el hombre. El Antiguo Testamento de la Biblia y las crónicas homéricas de la Grecia preclásica nos hablan del uso del vino por sociedades humanas en tiempos remotos. El propio Jesús de Nazaret tenía una visión tan positiva de él que convirtió agua en vino en las bodas de Caná. En la actualidad los estudios médicos señalan, además, que el consumo moderado de vino ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

La industria del vino ha logrado más que cualquier esfuerzo oficial por rescatar a Baja California de la mala imagen generada por el crimen. Los políticos mexicanos, sin embargo, son perversos. Gravan el vino en exceso en aras de una moral que no comparten, ya que ellos consumen las más caras botellas importadas en los restaurantes más costosos.

EN EXPANSIÓN

El gobierno nos dice que está ganando la guerra contra el narco porque ha detenido o matado a más capos que nunca. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano de la ONU, la PGR y la Secretaría de Marina sugiere, en cambio, que el área de cultivo se está expandiendo.

Twitter: @sergiosarmiento4

En Internet: www.sergiosarmiento.com
El autor es periodista y analista político/comentarista de televisión.



Lo que él quiso decir

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA*

Lucha contra el narco: Cambio de estrategia

Todos los presidentes de México han combatido al narcotráfico y al crimen organizado, pero cada uno ha adoptado estrategias distintas para hacerlo. El presidente Felipe Calderón eligió el camino de la “guerra”. A lo largo del sexenio se ha mantenido en ella y los resultados no parecen ser buenos.

El virtual presidente constitucional, Enrique Peña Nieto, ha delineado de manera general cuál sería su estrategia en la reunión que tuvo con los presidentes municipales electos del PRI, el pasado 16 de agosto. Su propuesta resulta distinta a la seguida por Calderón.

La premisa central de la alternativa delineada por Peña Nieto, para enfrentar la violencia y reducir de “manera significativa”

los homicidios, secuestros y extorsiones es que no se puede recurrir sólo al camino de la “fuerza”, que ha sido el punto central de la estrategia asumida por el actual gobierno.

A partir del deslinde de la “fuerza” como el eje articulador de la estrategia, se derivan una serie de líneas de acción que Peña Nieto dio a conocer en esa misma reunión con el compromiso de que en unas semanas presentará un plan acabado de la propuesta a implementar en su gobierno.

De lo dicho se ve que la estrategia contempla un enfoque integral que da la misma importancia a la policía y los órganos de seguridad del Estado, que al fortalecimiento del sistema judicial y a la ampliación de las acciones que contempla la política social.

Un ejemplo de éstas sería construir un sistema educativo de calidad que garantice establecer la jornada completa en las escuelas para que los estudiantes “pasen mayor tiempo en las aulas que en las calles” y estén mejor preparados, para participar en el mercado del trabajo.

Se habla también de fortalecer los acuerdos y los mecanismos de cooperación en seguridad de los tres niveles de gobierno y también avanzar en la creación de “po-

licías estatales únicas, para evitar la actual dispersión y fragmentación de las policías municipales”.

El plan contempla duplicar los efectivos de la Policía Federal, para colaborar de manera permanente en la lucha contra el crimen organizado en los estados y municipios, y prioriza los esfuerzos en los estados y municipios más violentos y con mayor riesgo.

La propuesta busca fortalecer el sistema de impartición de la justicia y disminuir la impunidad como también acelerar la instauración de los juicios orales y modernizar el sistema penitenciario para evitar esto se “convierta en una escuela del crimen”.

El cambio de la estrategia centrada sólo en la “fuerza” que ha resultado un fracaso es urgente y alentador que el nuevo gobierno contemple otra manera de hacer frente al problema del narcotráfico y el crimen organizado. Habrá, con todo, que analizar con cuidado cuando se dé a conocer la estrategia ya acabada.

Twitter: @RubenAguilar
<http://rubenaguilarvalenzuela.wordpress.com>
Correo electrónico:
ruben.aguilav@gmail.com
*El autor es ex vocero presidencial.



Juegos de poder

LEO ZUCKERMANN*

¿Por qué las frecuencias del espectro radioeléctrico -por donde viajan las señales de la televisión abierta, la telefonía móvil y los contenidos del Internet- no pueden asignarse por el mercado? ¿Por qué el gobierno es el propietario natural de dichas frecuencias? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que puede concesionarlas a empresas privadas?

Las frecuencias son un problema económico en todos los países del mundo. No son como los zapatos donde un intercambio voluntario de dos individuos, uno que los produce y vende, otro que los consume y compra, resuelve el problema de la provisión de este bien sin que tenga que intervenir el gobierno: Si los dos están de acuerdo con el precio, se hace la transacción y punto. Pero, ¿quién puede vender frecuencias que se encuentran en el aire?

Sólo el gobierno pues, si no interviene éste -ordenándolas, repartiéndolas y regulándolas- cualquier individuo podría apropiarse de ellas creando un caos de interferencia entre todos los que quieren transmitir por ahí sus datos. Esto generaría una calidad deficiente de los servicios lo cual disminuiría su valor económico.

Más aún, ahora que las telecomunicaciones están en plena expansión, con el desarrollo de nuevas tecnologías, las frecuencias por donde viaja la banda ancha de Internet son un bien escaso, muy demandado, que tienen por tanto un valor alto. Si el gobierno no interviene, la demanda del espectro radioeléctrico supera la oferta generando un desequilibrio económico.

En este sentido, las frecuencias de espectro radioeléctrico tienen características de un bien público. Y hay dos soluciones para la provisión de este tipo de bienes: Que una empresa gubernamental provea el servicio o que el gobierno concesione, coordine y regule las frecuencias entre cierto número de empresas privadas.

El problema del precio en el conflicto entre el gobierno y MVS

La primera solución es infrecuente en la provisión de banda ancha del Internet. En algunas localidades de países desarrollados, los gobiernos municipales se han dado a la tarea de proveerla directamente financiándola con impuestos locales. Hay otros modelos donde una empresa gubernamental se queda con las frecuencias y desarrolla la red que a su vez vende a diversas empresas, quienes deben ofrecer algunos servicios gratis a la población. Es el caso, por ejemplo, de Estocolmo en Suecia.

Desde luego que esto no le gusta nada a las empresas de telecomunicación que son las que quieren seguir utilizando frecuencias para ganar dinero. Un caso interesante, en este sentido, es lo que sucedió en Nueva Orleans después de la devastación por el huracán Katrina. En su reconstrucción se habló de la posibilidad de que la ciudad se apropiara de las frecuencias y desarrollara la red para ofrecer banda de banda ancha gratis a su población. Las empresas de telecomunicación se opusieron y lograron que el proyecto abortara para dar paso a una red privada.

En fin, que todavía son pocos los casos donde el gobierno se queda con las frecuencias y desarrolla la red para proveer directamente banda ancha. Lo cual nos lleva a la siguiente solución: concesionar el espectro. Ahí está la raíz del problema entre el gobierno y MVS. Hace muchos años, la SCT concesionó a MVS la banda de 2.5 gigahertz para transmitir un canal de televisión de paga por microondas. La banda no tenía un gran valor económico hasta que se desarrolló una nueva tecnología que permitía la provisión de banda ancha de Internet móvil en ciudades muy pobladas precisamente por esas frecuencias. El valor de la banda originalmente concesionada a MVS creció exponencialmente: Había, ahí, un nuevo negocio, muy rentable, que explotar.

Las concesiones de la banda 2.5 se venían (algunas, de hecho, lo hicieron). El gobierno, sin embargo, no las renovaba a

MVS ya que quería un nuevo precio por ellas. La última postura de la SCT fue de 27 mil millones de pesos por la banda entera. La empresa la rechazó y ofreció 104 millones de pesos, es decir el 0.38% de lo que estaba demandando el gobierno. Se trata de una enorme diferencia (imagine usted que va a una tienda y le piden 100 pesos por un artículo y usted sólo ofrece 38 centavos). Lejísimos estaban el gobierno y MVS de ponerse de acuerdo.

Cuando hay una diferencia así de grande pueden utilizarse mecanismos de mercado para encontrar el valor del bien en cuestión. El gobierno puso sobre la mesa una propuesta en este sentido. Resulta que la banda 2.5 es tan potente y valiosa que en ningún país la han concesionado toda a una sola empresa. Se vende en pedazos. Pues bien, el gobierno, según un comunicado de la Secretaría de Hacienda, le ofreció a MVS la posibilidad de subastar un segmento de la banda para ver qué precio le ponía el mercado. Luego, con este mismo precio, le renovarían las concesiones a MVS del resto de la banda. De acuerdo a Hacienda, la propuesta también fue rechazada por la empresa.

Ante la falta de acuerdo, el gobierno finalmente decidió recuperar la banda de 2.5 gigahertz para subastarla en pedazos. Esto ha generado un conflicto entre MVS y el gobierno donde se han dicho muchas cosas graves. Pero, más allá de los dimes y diretes, hay que entender la naturaleza del problema. Esto tiene que ver con un bien público que sólo puede ser provisto por el gobierno o, en su defecto, concesionado a los privados. Si se decide por la concesión a particulares, no es nada fácil ponerle un precio. En el mundo se utilizan dos mecanismos para hacerlo: Subastas o “desfiles de belleza” (así de llaman), de lo cual hablaré mañana.

Twitter: @leozuckermann
Correo electrónico: leo.zuckermann@cide.edu
El autor es analista político/profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).